

CAPÍTULO XII

LA APELACIÓN

1. CONSIDERACIONES GENERALES

I. La siguiente fase del proceso civil inglés, una vez obtenida una sentencia o resolución judicial es la apelación. El proceso civil no termina en la primera instancia sino que, en aquellas ocasiones, en las que una de las partes (*«appellants»*) juzgue errónea la decisión dictada por el tribunal *a quo* (*«lower courts»*) podrá interponer el recurso de apelación frente a un tribunal jerárquicamente superior o tribunal *ad quem* (*«appeal courts»*), siempre y cuando cumpla con los requisitos previstos.

Al contrario de lo que ocurre en otras jurisdicciones, en Inglaterra, no existe un único tribunal con competencia exclusiva para conocer de los asuntos en sede de apelación, sino que éste dependerá del juez encargado del enjuiciamiento del asunto y del tribunal *a quo*.

II. En todo caso, existe un fuerte **interés público** en evitar el litigio, en el sentido de fomentar y potenciar los acuerdos transaccionales. Este interés justifica que las decisiones judiciales se consideren, *prima facie*, finales y vinculantes, de forma que el sistema de apelación en la jurisdicción inglesa se conceptúa como un recurso o medida excepcional⁴⁷⁴. El recurso de apelación se configura como una herramienta necesaria para corregir cuantos errores pudiera haber incurrido el tribunal de primera instancia, con el objetivo de alcanzar un resultado justo.

III. El **procedimiento** del recurso de apelación es similar para el *County Court*, el *High Court* y el *Court of Appeal* y está regulado, principalmente, por el CPR Parte 52 y las Practice Directions correspondientes. No obstante, no es así en el Tribunal Supremo, pues sus normas se recogen en la Supreme Court Rules 2009. En la práctica, los recursos más frecuentes se substancian frente a las decisiones del *County Court* y del *High Court*⁴⁷⁵.

2. EL SISTEMA DE APELACIÓN

I. Como norma general, del recurso de apelación conocerá el juez jerárquico superior. La Practice Direction 52A.3.5 expone cuáles son los tribunales competentes para conocer de los recursos de apelación:

⁴⁷⁴ SIME, S., *A practical Approach to Civil Procedure*, op. cit., pág. 565.

⁴⁷⁵ CUNNINGHAM-HULL, S. & ELDER, K., *Civil Litigation Handbook 2013-2014*, op. cit., pág. 388.

- El *circuit judge* del *County Court* conocerá de las decisiones de los *distric judges* del *County Court*
- El juez del *High Court* conocerán de las decisiones de los *masters* y *district judges* del *High Court*
- El juez del *High Court* conocerán de las decisiones de los *circuit judges* en el *County Court*
- El *Court of Appeal* conocerá de las decisiones de los jueces del *High Court*
- El Tribunal Supremo conocerá de los recursos de apelación frente a las decisiones del *Court of Appeal*.

El sistema de tramitación de recursos en materia civil⁴⁷⁶ se resume en la tabla provista por la PD 52A.3.5:

Tribunal	Juez encargado	Naturaleza de la reclamación	Cautelar/ final	Destino
County Court	DJ	Pt 7 Claim	Cautelar	CJ (CC)
		Pt 7 Claim (no MT)	Final	
		Pt 7 Claim (MT)	Final	
		Pt 8 Claim	Cautelar / final	
		Otro	Cautelar / final	
	CJ	Especial	Cautelar	CA
		Pt 7 Claim	Final	
High Court	Master	Pt 7 Claim (no MT)	Cautelar	HCJ
		Pt 7 Claim (MT)	Final	
		Pt 8 Claim	Final	
		Pt 7 Claim (MT)	Cautelar / final	
		Otro	Cautelar / final	
		Especial	Cautelar	
		Final	Final	
	HCJ	Pt 7 Claim	Cautelar	CA
		Pt 7 Claim (no MT)	Final	
		Pt 7 Claim (MT)	Final	

Este sistema de apelaciones supone que, en ocasiones, las decisiones puedan ser revisadas en más de tres ocasiones⁴⁷⁷, lo que resulta completamente insólito comparado con otras jurisdicciones. En este sentido, The Access to Justice Act 1999 (Destination of Appeals) Order 2000, en su art. 5, dispone que el *Court of Appeal* conocerá directamente de las apelaciones que se interpongan en segundo grado («second appeals»), es decir, cuando se impugne una

⁴⁷⁶ Excluyendo los procedimientos de familia e insolvencia.

⁴⁷⁷ Por ejemplo, las decisiones de los *circuit judges* en el *County Court* o de los *masters* en el *High Court*.

sentencia que, a su vez, haya resuelto de una apelación. Asimismo, el *Court of Appeal* conocerá directamente del recurso de apelación en lugar del juez del *High Court* en la medida en que:

- La decisión judicial se considere final en relación a las reclamaciones de la Parte 7 CPR, en la vía procesal del *multi-track* o en procedimientos especiales⁴⁷⁸. Este criterio es de aplicación para las decisiones finales en las reclamaciones asignadas a la *multi-track* juzgadas por un *district judge* o *circuit judge* del *County Court* y por *masters* en el *High Court* (The Access to Justice Act 1999, art. 4)
- La decisión que se pretende apelar del tribunal inferior resolviere a su vez sobre un recurso de apelación frente a la decisión de un *distric judge* del *County Court* (The Access to Justice Act 1999, sección 5).

Aun cuando las reclamaciones del Parte 8 CPR se asignan automáticamente a la *multi-track* (r. 8.9(c) CPR), la excepción referida no se extiende a este tipo de disputas. Por lo tanto, el recurso de apelación frente a las decisiones que se dicten en estos procedimientos seguirá el curso normal.

II. El trámite de apelación expuesto contiene ciertas excepciones, de manera que, en determinados supuestos, los recursos de apelación no seguirán el trámite previsto. En este sentido, si el *iter* normal para la primera apelación de una resolución de un *district judge* o un *master* sería el *circuit judge* del *High Court*, el tribunal de primera instancia o el encargado de conocer de la apelación podrá ordenar que se transfiera la apelación directamente al *Court of Appeal*, en la medida en que: (i) la apelación plantee una cuestión especialmente relevante o (ii) que las circunstancias del caso hagan recomendable que conozca directamente el *Court of Appeal*.

Del mismo modo, muy excepcionalmente, se podrá sustanciar la apelación directamente frente a una decisión del *High Court* ante el Tribunal Supremo, siempre y cuando:

- La cuestión de derecho en que se fundamentase la apelación fuese de interés público
- La cuestión de derecho estuviera relacionada con la interpretación de una ley parlamentaria o un reglamento o se refiriese a una cuestión a la que el tribunal de primera instancia estuviera vinculado, por una decisión del *Court of Appeal* o del Tribunal Supremo
- Que todas las partes muestren su consentimiento
- El juez encargado del juicio (*trial judge*) certificase, inmediatamente, a la finalización del juicio o en los 14 días siguientes, que el caso es susceptible de ser apelado ante el Tribunal Supremo
- El Tribunal Supremo autorizase la sustanciación de la apelación en el plazo de un mes desde la certificación judicial.

De concederse la autorización se perderá el derecho a apelar ante el *Court of Appeal*. Sin embargo, si obtenida la autorización, no se interpone el recurso en plazo o cuando la autorización esté sujeta a condiciones y el apelante no acepte éstas, el derecho a apelar ante el *Court of Appeal* quedará reinstaurado⁴⁷⁹.

⁴⁷⁸ Por decisión «final» se entienden todas las que resuelvan la totalidad del procedimiento o las decisiones judiciales que decidan un asunto después de celebrar una vista o un juicio en caso de división del procedimiento.

⁴⁷⁹ LEABETTER, J., MCCAFFERTY, L., O'SULLIVAN, S., & PURCHAS, J., en *Civil Appeals: Principle and Procedure*, Sweet & Maxwell, 2010, pág. 415.

3. LA AUTORIZACIÓN PREVIA

I. A tenor a lo dispuesto en el CPR r. 52.3(1) y, conforme a lo previsto en las Practice Directions correspondientes, el apelante, salvo en casos excepcionales, necesitará el permiso o autorización para apelar una decisión judicial dictada por un juez del *County Court* o del *High Court*. Estas excepciones son situaciones en las que el apelante ostenta un derecho inherente a la apelación porque su libertad está en juego⁴⁸⁰.

En términos generales, la **solicitud** para la obtención del permiso del tribunal para apelar se solicitará ante el tribunal *a quo* en la vista en la que se hubiere dictado la decisión, o bien directamente ante el tribunal que conozca de la apelación (r. 52.3(2) CPR). Cuando el tribunal que hubiese conocido del asunto en **primera instancia** hubiere denegado el permiso, deberá señalar expresamente, en su resolución, el tribunal ante el que se podrá realizar otra solicitud y el nivel jerárquico del juez que deberá conocer de la misma. Sin embargo, en el caso de los recursos de apelación en **segundo grado** («*second appeals*»), la autorización la deberá otorgar directamente el *Court of Appeal*, en relación a cualquier decisión que se pretenda impugnar del *County Court* o del *High Court* que, a su vez, haya resuelto un recurso de apelación previo. Así pues, el *Court of Appeal* será el único competente en esos casos para conceder la autorización.

El permiso se concederá exclusivamente si el tribunal considera que: (i) la apelación tiene verdaderas posibilidades de ser estimada o (ii) cuando exista otra razón de peso que lo justifique. El permiso podrá concederse en relación a todo o parte del recurso, incluso sujeto a condiciones⁴⁸¹.

II. Se entenderá que existen posibilidades de estimar el recurso si su fundamento es que la decisión del tribunal, cuyo fallo se pretende impugnar, es palmariamente errónea o injusta; siendo éstos los dos únicos argumentos a utilizar por el apelante. De lo contrario se deberá respetar la **presunción** de que la resolución judicial es correcta.

En efecto, el tribunal *a quo* al tener la oportunidad de valorar las pruebas directamente —claro ejemplo de ello son las declaraciones testificales— goza de una notoria ventaja frente al tribunal *ad quem*, el cual deberá ser especialmente precavido en su análisis sobre la valoración de la prueba⁴⁸² y, a la sazón, sobre la posibilidad de revocar la sentencia dictada por un tribunal inferior.

III. La **decisión del tribunal** que conozca de la apelación, de conceder o no la autorización, no se podrá apelar, siempre y cuando se haya celebrado una vista para debatir la cuestión. En caso contrario, en el plazo de 7 días una vez notificada la decisión del tribunal, se podrá solicitar razonadamente que reconsidere su decisión en una vista (r. 53.3 (4) CPR)⁴⁸³.

La parte que pretenda interponer el recurso de apelación o solicitar la autorización para la presentación de éste último deberá realizarlo dentro del plazo estipulado por el tribunal que conoció del asunto cuya sentencia se pretenda impugnar o, en caso de silencio por parte del tri-

⁴⁸⁰ Tales como, por ejemplo: (i) la apelación pretendida por la parte que haya cometido desacato («*contemtnors*») frente a la denominada *committal order*, esto es, una orden judicial por la que se imponen penas de prisión a la parte que hubiera ignorado una orden judicial anterior, o (ii) la denegación del *habeas corpus*.

⁴⁸¹ El tribunal que conozca de la apelación podrá razonadamente anular el permiso otorgado o modificar las condiciones.

⁴⁸² LEABETER, J., McCAFFERTY, L., O'SULLIVAN, S., & PURCHAS, J., *Civil Appeals: Principle and Procedure*, op. cit., pág. 82.

⁴⁸³ Si bien se le ha de notificar al litigante contrario la solicitud de reconsideración, ésta no está obligada a acudir a la vista, salvo que el tribunal lo disponga.

bunal, 21 días desde la fecha de la resolución (r. 52.4 CPR). El referido plazo podrá extenderse, siempre que la parte interesada presente la solicitud al tribunal que conozca de la apelación⁴⁸⁴.

4. LA TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

I. La admisión del recurso de apelación está sujeta a determinadas condiciones. La parte apelante que pretenda impugnar una resolución judicial deberá presentar el recurso de apelación («*appellant's notice*»), en el plazo previsto de 21 días, una vez dictada por el tribunal jerárquico inferior su decisión, acompañándolo del pago de la tasa judicial correspondiente⁴⁸⁵.

El recurso deberá presentarse utilizando el formulario N161, identificando los fundamentos del recurso que demuestren que la sentencia apelada era:

- (i) Errónea, al haber incurrido en un manifiesto error de Derecho o de Hecho⁴⁸⁶, o
- (ii) Injusta, como consecuencia de serias irregularidades ocurridas durante el transcurso del proceso⁴⁸⁷.

Acompañando al recurso de apelación, el apelante deberá presentar la documentación necesaria, recogida en las Practice Directions 52B y 52C (para apelaciones ante el *Court of Appeal*). Entre los documentos necesarios se encuentran:

- La copia sellada del escrito de apelación
- Una copia del *skeleton argument*
- Los *statements of case*
- La transcripción de la resolución de primera instancia
- Un documento que contenga la doctrina y jurisprudencia que sirva de fundamento («*list of authorities*»)⁴⁸⁸
- Los demás documentos que se consideren especialmente relevantes⁴⁸⁹.

Interpuesto el recurso de apelación se notificará al demandado tan pronto como sea posible, salvo indicación en contrario del tribunal, que procederá a comunicar a las partes la fecha en que tendrá lugar la vista, junto con un formulario a completar por el apelante («*appel questionnaires*»). En el formulario deberá confirmar que se compromete a aportar toda la documentación necesaria cuando así lo ordene el tribunal (al igual que notificársela a la parte apelada), que está debidamente representado o el tiempo que estima necesario para presentar sus alegaciones en la vista (PD 52.6(5))⁴⁹⁰.

⁴⁸⁴ Por lo tanto, las partes no podrán acordar dicha extensión, sino que es una facultad limitada de los órganos judiciales.

⁴⁸⁵ Las cuantías correspondientes de las tasas judiciales aparecen recogidas en el folleto informativo EX50.

⁴⁸⁶ El error puede reacer sobre una cuestión de hecho o de derecho. De manera ilustrativa, MALEK, H. M. en *Phipson on Evidence*, Sweet & Maxwell, 2013, pág. 4, define cuestiones de hecho como todo aquello que está sujeto a la percepción o la conciencia.

⁴⁸⁷ CUNNINGHAM-HILL, S., & ELDER, K., *Civil Litigation Handbook 2013-2014*, op. cit., pág. 389.

⁴⁸⁸ Las partes también podrán referirse al acta de lo discutido en la *House of Commons* y el *House of Lords*, denominado *Hansard*.

⁴⁸⁹ En el caso de las reclamaciones de menor cuantía asignadas a la *small track* los requisitos son más sencillos (PD 52B).

⁴⁹⁰ Si la parte apelada no está conforme con el tiempo previsto por el apelante, deberá notificárselo al tribunal dentro de los siete días desde la notificación del *appel questionnaire*. En caso contrario, se entenderá que ha aceptado el tiempo propuesto.

II. La parte apelada podrá igualmente presentar un recurso de apelación al **impugnar** la resolución del tribunal inferior, utilizando el formulario N162. La facultad de presentar el recurso deviene en obligación en aquellas situaciones en las que la parte apelada pretenda impugnar la decisión del tribunal *a quo* de forma que (i) confirme su fallo pero modifique la fundamentación o (ii) rectifique su parte dispositiva («*cross-appealing*»).

Así pues, podemos señalar hasta tres supuestos: el primero, en el que la parte apelada exclusivamente pretende que se confirme la resolución apelada, en este caso no necesitará presentar recurso alguno. En segundo lugar, en caso de querer confirmar la resolución sirviéndose de una fundamentación distinta a la utilizada por el tribunal deberá interponer el recurso, sin que sea necesaria la autorización del tribunal que conozca de la apelación. De igual modo y en tercer lugar, si trata de impugnar la decisión judicial, al pretender modificar su parte dispositiva, deberá presentar el recurso de apelación, si bien necesita de la autorización previa del tribunal.

III. La interposición del recurso tendrá **efectos suspensivos**, salvo en contadas excepciones. Como acertadamente quedó resumido en *Hammon Suddar c. Agrichem International*⁴⁹¹, a la hora de plantearse decidir sobre una suspensión se deberán tener en consideración: (i) las posibles consecuencias negativas que ello tendría para con la apelación, (ii) los riesgos de que, concedida la suspensión y si el recurso fuera desestimado, la parte apelada fuera incapaz de ejecutar la sentencia y (iii) si la suspensión se deniega y el recurso de apelación se estima, habiéndose ejecutado la sentencia mientras tanto, las posibilidades de que el apelante pudiera recuperar lo ya abonado a la contraparte a razón de la ejecución de la sentencia⁴⁹².

IV. El tribunal de apelación, en el proceso de toma de decisiones, podrá acordar la celebración de una vista, aunque, en principio, no es necesaria. Como ha quedado anteriormente apuntado, el tribunal de apelación solo podrá revocar la decisión de un tribunal jerárquico inferior si considera que incurrió en un error (de hecho o de derecho o en el ejercicio de su discreción) o en caso de existir evidentes irregularidades durante el proceso.

Sin embargo, se debe partir de la **presunción** de que el razonamiento del tribunal de primera instancia resulta acertado. En especial, en relación a la valoración de los hechos. En efecto, conforme a lo dispuesto en *Smith New Court Securities c. Citibank*, salvo en ocasiones muy excepcionales: «La presunción es que la decisión sobre las cuestiones de Hecho es correcta. El Tribunal de Apelación solo revocará la decisión del juez encargado del juicio sobre una cuestión de hecho cuando esté convencido de que su postura es errónea. En ese caso, si el Tribunal de Apelación dudase sobre la exactitud de la conclusión, no la alterará»⁴⁹³.

Por otro lado, conforme a lo argumentado en *Hadmor Productions c. Hamilton*, resulta especialmente compleja la apelación de una decisión judicial con base en el erróneo ejercicio de la discreción del tribunal, en la medida en que la función del tribunal de apelación: «No es ejercitar una discreción independiente. Deberá respetar el ejercicio de la discreción del juez [de primera instancia] y no deberá interferir en ella por el simple hecho de que los miembros del tribunal de apelación hubieran ejercido su discreción de diferente manera»⁴⁹⁴.

V. Por último, en virtud de lo dispuesto en el CPR r. 52.10 (2), el **tribunal ad quem** en su decisión podrá:

- Confirmar, anular o modificar la resolución
- Remitir cualquier controversia al tribunal inferior
- Ordenar un nuevo juicio o vista
- Dictar órdenes para el pago de intereses
- Dictar órdenes para el pago de las costas.

5. POSIBILIDAD DE REABRIR LA APELACIÓN

I. Una de las facultades del tribunal es la de reabrir la apelación, esto es, iniciar de nuevo el proceso de segunda instancia una vez terminado y siendo firme la decisión judicial. La norma general es que las decisiones judiciales se consideren finales o firmes, por lo que una vez dictada la sentencia el tribunal *ad quem* deja de ser competente. No obstante, en casos especialmente extraordinarios, el CPR autoriza al tribunal a reabrir la apelación (r. 52.17 CPR), y regula su procedimiento en la Practice Direction 52.

En un principio, el CPR no contemplaba esta facultad, sino que es fruto de dos importantes decisiones judiciales: en *Taylor c. Lawrence*, el Court of Appeal concluyó que efectivamente era competente para reabrir un apelación una vez terminada para evitar que se produjesen injusticias⁴⁹⁵. En el mismo sentido, en *Seray Wurie c. Hackney*⁴⁹⁶, el *Court of Appeal* extendió dicha facultad al *High Court*⁴⁹⁷.

No obstante, el *High Court* y el *Court of Appeal* deberán ser extremadamente cautos en el ejercicio de esta discrecionalidad. Ciertamente es que la **finalidad** última es evitar la comisión de injusticias, corrigiendo las decisiones erróneas y desarrollando así acertadamente la ley, fijando precedentes libres de equívocos; sin embargo, ese objetivo se ha de equilibrar con el «principio cardinal de la justicia»⁴⁹⁸ de que el resultado firme de una apelación debe considerarse final.

II. Así, el CPR (r. 52.17) regula la posibilidad de reabrir una apelación en ocasiones muy excepcionales, siempre y cuando sea estrictamente necesario para evitar una injusticia y no exista ninguna otra solución judicial disponible⁴⁹⁹.

En definitiva, los tribunales ejercitarán esta prerrogativa de forma extraordinaria, dada la **interpretación restrictiva** que merece la disposición del CPR y los precedentes judiciales sobre los que se fundamenta. Un claro ejemplo en el que podría ejercitarse la mencionada facultad son aquellos casos en que el tribunal estuviera manifestamente influenciado y hubiera emitido una decisión sesgada y parcial.

Como veremos a continuación, el test para poder reabrir una apelación se complementa con aquel aplicable a la admisión de la prueba en segunda instancia; esto es: cuando se pretenda reabrir una apelación bajo pretexto de una injusticia cometida que estaría fundamentada en una nueva prueba, la admisión de ésta dependerá del cumplimiento de sus requisitos, mientras

⁴⁹⁵ *Taylor c. Lawrence* [2002] EWCA Civ 90.

⁴⁹⁶ *Seray Wurie c. Hackney LBC* [2002] EWCA Civ 909.

⁴⁹⁷ *El County Court*, sin embargo, no goza de esta prerrogativa (r. 52.17 (3) CPR).

⁴⁹⁸ *Courzenbergh c. Valkova* [2004] EWCA Civ 676.

⁴⁹⁹ De esta forma, en el caso de que la parte interesada pudiera recurrir al Tribunal Supremo, sólo se podría reabrir la apelación una vez el Alto Tribunal hubiera denegado la autorización para apelar.

⁴⁹¹ *Hammon Suddar Solicitors c. Agrichem International Holdings Ltd* [2001] EXCA Civ 1915.

⁴⁹² En virtud de lo expuesto en *Linotype-Hell Finance Ltd c. Baker* [1993] 1 WLR 321, la suspensión solo podrá concederse cuando, de no concederse, podría implicar la ruina del apelante.

⁴⁹³ *Smith New Court Securities Ltd c. Citibank NA* [1997] AC.

⁴⁹⁴ *Hadmor Productions Ltd c. Hamilton* [1983] 1 AC 191.

que no se reabrirá la apelación sino cuando, además, se hubieran cumplido los requerimientos necesarios para la reapertura de la apelación.

III. De cumplir con estos requisitos, se deberá solicitar la **autorización del tribunal** cuya apelación se pretende reabrir, aportando junto con la solicitud las pruebas escritas suficientes. Notificada la solicitud a la contraparte, ésta podrá presentar las alegaciones escritas que considere oportunas. La decisión final será definitiva e inapelable (r. 52.17 (7) CPR).

6. LA PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA

I. La admisión de prueba en segunda instancia está regulada en el CPR r.52.11 (2), que advierte que el tribunal de apelación no aceptará medios de prueba orales o pruebas que no se hubieran presentado ante el tribunal inferior jerárquico.

La decisión más relevante en esta materia es *Ladd c. Marshall* que, si bien es anterior al CPR, en la actualidad sirve de guía para los tribunales al fijar el test que deberán aplicar⁵⁰⁰. «[P]rimero, se debe demostrar que no se pudo obtener la prueba con el empleo de una diligencia razonable para su uso en el juicio; segundo, la prueba debe ser tal que, de presentarse, probablemente tendría una influencia en el resultado del caso, si bien ello no supone que sea decisiva; tercero, la prueba debe ser tal que se presuponga su veracidad, o en otras palabras, debe ser verosímil en apariencia, lo que no comporta que sea indiscutibles»⁵⁰¹.

Así pues, solo se podrá pedir la práctica de prueba en segunda instancia de los medios probatorios cuya veracidad se presuma que se refieran a hechos relevantes para la resolución del litigio, siempre y cuando la parte que pretendiese su práctica justifique que ha tenido conocimiento de esos hechos posteriormente, dado que le ha sido imposible conocer de los mismos con anterioridad, actuando con la diligencia debida.

A mayor abundamiento, además del test impuesto por *Ladd c. Marshall*, el tribunal deberá tener en consideración el *overriding objective*, a tenor del cual los casos se deberán abordar de forma justa, de manera que decidirá sobre la admisibilidad de la prueba en interés de la justicia. Así pues, en aplicación del *overriding objective*, se admitirán nuevos elementos probatorios de hechos anteriores sobre los que no se hubiera tenido conocimiento con anterioridad (*«fresh evidence»*), toda vez que se cumplan una serie de requisitos. En la práctica, los tribunales han interpretado restrictivamente la posibilidad de aportación de este tipo de pruebas.

II. El CPR no recoge expresamente la posibilidad de valerse de medios de prueba posteriores a la vista. La jurisprudencia anterior al CPR, que a la sazón resulta igualmente de utilidad como guía en el ejercicio de la discreción de los tribunales, ha aplicado nuevamente un **criterio restrictivo** en relación a la admisión de pruebas relativas a acontecimientos que hubieran acaecido con posterioridad a la vista, especialmente, cuando el plazo para apelar hubiera transcurrido.

De lo contrario, esto es, cuando la parte tuviera conocimiento de un nuevo hecho durante el plazo previsto para apelar, los tribunales, si bien, en un principio, son reacios a la admisión de este tipo de pruebas, se han mostrado, en ocasiones, más favorables a su admisión⁵⁰².

III. Por último, mención especial merecen aquellas situaciones en las que el hecho nuevo demuestra que el anterior proceso estuvo viciado por fraude. En estos casos la jurisprudencia se encuentra dividida. Conforme a lo expuesto en *Hamilton c. Al Fayed*, el *Court of Appeal* dispuso que el interesado debería solicitar la celebración de un nuevo juicio (*«retrial»*), sin embargo, dos meses más tarde el *House of Lords* concluyó que la medida apropiada era comenzar una nueva acción⁵⁰³.

El *Court of Appeal* puso fin a la referida incertidumbre en *Owens c. Noble* [2010] *EWCA Civ* 224, a tenor de la cual si la alegación de fraude es admitida o no se trata de un argumento controvertido la parte interesada podrá solicitar un nuevo juicio, además de la admisión de la prueba del hecho nuevo, en cuyo caso lo más recomendable sería que conociese del asunto el mismo *trial judge*, en la medida en que se considera la persona idónea para comparar el hecho nuevo con las pruebas presentadas originariamente; por el contrario, si la alegación de fraude es controvertida, se deberá comenzar un nuevo procedimiento⁵⁰⁴.

7. EL RECURSO DE APELACIÓN ANTE EL SUPREME COURT

I. La apelación ante el Alto tribunal, al contrario de lo que ocurre con los recursos de apelación ante tribunales inferiores, está regulada por las Supreme Court Rules 2009 y por las Practice Directions emitidas por el presidente del Tribunal Supremo⁵⁰⁵.

El *Supreme Court* (anterior *House of Lords*) es la **última instancia civil** en el Reino Unido, competente para conocer de los recursos de apelación que se interpongan frente a las decisiones del *Court of Appeal* o, excepcionalmente, del *High Court*, especialmente relevantes, conforme a lo dispuesto en *Lane c. Esdaile*:

«En su papel de Tribunal Supremo, el House [of Lords] debe necesariamente concentrar su atención en un número relativamente reducido de casos que planteen cuestiones de interés general»⁵⁰⁶.

En la gran mayoría de las ocasiones, el Tribunal Supremo conocerá de cuestiones de Derecho y, sólo excepcionalmente, de cuestiones procesales o en materia de costas. Por lo tanto, el apelante deberá demostrar que la apelación comprende una cuestión de Derecho de interés general, teniendo en consideración que ya habrá estado sujeta al discernimiento y revisión en una apelación anterior.

II. En las apelaciones de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, para presentar el recurso será necesaria la **autorización** del tribunal que conozca de la apelación (en primer lugar) o del propio Tribunal Supremo⁵⁰⁷; no así en el caso de Escocia. Si la autorización solicitada fuere rechazada por el tribunal de apelación, el apelante podrá volver a solicitarla esta vez ante el Tribu-

⁵⁰³ *Hamilton c. Al Fayed* (No.4) [2001] *EMLR* 15.

⁵⁰⁴ *Owens c. Noble* [2010] *EWCA Civ* 224.

⁵⁰⁵ El Tribunal Supremo facilita toda la información a través de su página web www.supremecourt.gov.uk.

⁵⁰⁶ *Lane c. Esdaile* [1891] *AC* 210.

⁵⁰⁷ Además de la parte que solicita la autorización, la Regla 15(1) de la Supreme Court Rules 2009 autoriza a que cualquier persona y, en particular, cualquier organismo oficial u organización no gubernamental pueda presentar alegaciones escritas en interés general, a favor de la petición de la autorización. No obstante, si el tercero interviniente quisiera ser parte del procedimiento deberá solicitarlo al Tribunal Supremo utilizando el *Form* 3 (r. 26). La decisión del Tribunal se dará a conocer por escrito. En todo caso, se rechazará la solicitud si el interviniente meramente reitera los argumentos ya expuestos por una de las partes, en la medida que no es su papel el de actuar como un letrado adicional de ninguna de ellas (*E c. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary* [2008] 3 *WLR* 1208 HL).

⁵⁰⁰ LEABETER, J., McCAFFERTY, L., O'SULLIVAN, S., & PURCHAS, J., *Civil Appeals: Principle and Procedure*, op. cit., pág. 152.

⁵⁰¹ *Ladd c. Marshall* [1954] 1 *WLR*.

⁵⁰² LEABETER, J., McCAFFERTY, L., O'SULLIVAN, S., & PURCHAS, J., *Civil Appeals: Principle and Procedure*, op. cit., op. cit., pág. 161.

nal Supremo, utilizando el formulario *Form 1*, que recoge conjuntamente la solicitud y el recurso de apelación. De la solicitud ante el Tribunal Supremo conocerá un tribunal colegiado formado por tres jueces, dando a conocer su decisión por escrito⁵⁰⁸, sin la celebración de una vista⁵⁰⁹.

El carácter excepcional y restrictivo con que afronta el *Court of Appeal* las solicitudes de autorización para sustanciar el recurso ante el Tribunal Supremo, le permite retener el control sobre el número y la naturaleza de asuntos que conocerá. De esta suerte, el *Court of Appeal* expuso su criterio en *Taylor c. Lawrence*:

«En el caso de una apelación ante el *House of Lords* no es suficiente con mostrar una expectativa razonable de que la apelación sea estimada. El potencial apelante debe mostrar asimismo que el caso es de tal importancia que justifica la atención del *House of Lords*. Es el *House of Lords* quien mejor puede juzgar si un caso en particular cumple con este test. Es el *House of Lords* quien mejor puede juzgar si sus limitados recursos judiciales se utilizarían adecuadamente al conocer de una apelación en particular. Es por ello por lo que este tribunal raramente ejercita su competencia de otorgar la autorización para al *House of Lords*»⁵¹⁰.

Por otro lado, la contraparte podrá presentar sus alegaciones (utilizando el formulario *Form 3*) frente al escrito del apelante solicitando la autorización. De no presentar el escrito no podrá seguir participando en el proceso, no se le notificará su avance y no podrá obtener una resolución a favor en materia de costas.

III. De concederse la autorización⁵¹¹, el apelante deberá confirmar, en el plazo de 14 días, que pretende continuar con la apelación⁵¹². La parte apelada que desee participar en la apelación, a su vez, deberá presentar el formulario *Form 3* en el plazo de 14 días desde la notificación de la intención del apelante. De continuar con la apelación las Reglas 22 y 24 describen los documentos necesarios que deberán ser presentados.

Del recurso conocerá, en una **vista pública**⁵¹³, un tribunal colegiado formado por un número impar de magistrados del Tribunal Supremo (un mínimo de tres), que generalmente consistirá en 5 magistrados; si bien, en los casos en que su complejidad así lo requiera podrán conocer hasta siete o nueve. La decisión final del tribunal podrá (r. 29(1) CPR):

- Confirmar, anular o modificar la resolución recurrida
- Remitir el asunto a la consideración de un tribunal inferior
- Ordenar que se celebre un nuevo juicio o vista
- Dictar resoluciones para el pago de intereses
- Dictar resoluciones en materia de costas.

IV. Asimismo, al igual que ocurre con el *High Court* y el *Court of Appeal*, el Tribunal Supremo podrá ordenar que se **reabra una apelación**. Igualmente, la competencia del Tribunal se confirmó vía jurisprudencial en *R. c. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate*⁵¹⁴.

⁵⁰⁸ De no concederse la autorización por escrito, no se podrá solicitar que se revise la decisión en una vista.
⁵⁰⁹ El Tribunal goza de la discreción suficiente para decidir la celebración de una vista cuando así lo entienda necesario.

⁵¹⁰ *Taylor c. Lawrence* [2002] 3 WLR 640.

⁵¹¹ Cabe recordar que la autorización se concederá en relación a todo o parte del escrito de solicitud presentado.

⁵¹² Si la solicitud se rechazase la contraparte podrá solicitar, habida cuenta que hubiere presentado el escrito oponiéndose a la referida solicitud, que se dicte una resolución en materia de costas en perjuicio del apelante. Por el contrario, si se concediese la autorización, las costas se integrarán en el total de la apelación.

⁵¹³ La vista pública podrá ser retransmitida, siendo el único tribunal del Reino Unido que lo permite.

⁵¹⁴ *R. c. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate Ex p. Pinochet Ugarte* [2000] 1 AC.

PARTE TERCERA

LAS MEDIDAS CAUTELARES Y LA EJECUCIÓN